

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

DEMANDANTE : MARTÍN RAÚL ROLDÁN RODRÍGUEZ
DEMANDADO : FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., PROVENIR S.A. Y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-016-2023-00010-01
RADICADO INTERNO : 025-24
DECISIÓN : REVOCA PARCIALMENTE, ADICIONA, ORDENA, ABSUELVE Y CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 045

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el **recurso de apelación y en el grado jurisdiccional de consulta**, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita, se DECLARE la ineficacia de la afiliación del actor al Régimen de Ahorro Individual por falta de consentimiento informado; como consecuencia, se declare la ineficacia del traslado horizontal realizado a la sociedad PORVENIR S.A; que el actor se encuentra válidamente afiliado Colpensiones, sin solución de continuidad.

Se ORDENE el traslado inmediato del actor PROTECCIÓN S.A. hacia Colpensiones; y ordenarle a PROTECCIÓN S.A a trasladar a Colpensiones, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual junto con todos sus frutos e intereses como lo dispone el art. 1746 del Código Civil, es decir, incluyendo los rendimientos financieros generados durante todos los años en que estuvo el Régimen de Ahorro Individual; el

traslado de los valores descontados por concepto de aportes a la garantía de pensión mínima, comisiones de administración con indexación y primas de seguros.

Se le ORDENE a PORVENIR S.A. trasladar a Colpensiones, los descuentos por las cuotas de administración, comisiones, porcentajes de reaseguro, aportes al fondo de garantía mínima y/o cualquier suma que haya retenido mientras estuvo vigente la afiliación del demandante en dicha AFP.

Se le ORDENE a Colpensiones a aceptar el traslado del accionante del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y a recibir los valores enunciados anteriormente e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del demandante. Y condenar a las demandadas en costas procesales.

Como supuestos fácticos con que sustenta sus pretensiones, expone que el actor nació el 21 de diciembre de 1960; comenzó a realizar cotizaciones en el Régimen de Prima Media el 10 de enero de 1980; en el año 1998 los asesores de PROTECCIÓN S.A., acudieron a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de Yarumal - Antioquia, y lo persuadieron para que se trasladara de régimen pensional, manifestándole que le favorecía vincularse a esa AFP, argumentando que en el Régimen de Ahorro Individual tendría una mejor mesada pensional, que recibiría antes de la edad mínima, y resaltaron la poca viabilidad financiera del ISS; que los asesores de la AFP no le suministraron información previa, completa, clara y suficiente acerca del verdadero alcance de trasladarse de régimen y no estudiaron las condiciones particulares del actor; el actor se vinculó a PROTECCIÓN S.A el 3 de diciembre de 1998 y se hizo efectivo el traslado el 1º de febrero de 1999, oportunidad en que tenía 536.86 semanas de las cuales 201.43 semanas fueron cotizadas al ISS y 335.42 fueron tiempo de servicio con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia; se trasladó a PORVENIR S.A el 31 de julio de 2001 con efectividad desde el 1º de agosto de la misma anualidad.

El actor elevó solicitud a PROTECCIÓN S.A el 9 de septiembre de 2022, solicitando la entrega de los documentos del momento en que se trasladó de régimen, información sobre la reasesoría realizada y le realizaran simulación de la mesada pensional en ambos regímenes pensionales; el 30 de septiembre de 2022 le fue dada la respuesta informando que no cuenta con soportes distintos al formulario y en la simulación de la mesada pensional informó que a los 62 años la pensión sería de \$4.871.121,72 en Colpensiones y \$7.333.011

en el Régimen de Ahorro Individual; el actor solicitó a PROTECCIÓN S.A y a Colpensiones el traslado de régimen pensional por no haber existido consentimiento informado; y en comunicaciones del 24 de octubre y del 9 de noviembre de 2022, las accionadas negaron lo solicitado. El actor elevó solicitud a PORVENIR S.A de la información de su vinculación y el estudio realizado para determinar que al actor le convenía quedarse en el Régimen de Ahorro Individual, sin que haya dado respuesta.

RESPUESTAS A LA DEMANDA

La accionada PORVENIR S.A. en su contestación expone que no es cierto que haya sido persuadido por asesores para trasladarse porque al momento de su afiliación con Porvenir S.A. el 31 de julio de 2001 luego de estudiar su caso especial, se le puso de presente las condiciones y características del régimen, las ventajas y desventajas para que pudiera tomar una decisión libre, consciente e informada; no es cierto lo relacionado con la solicitud elevada ni a la falta de contestación de la solicitud. En relación con los hechos restantes, indico que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Como excepciones, propuso las de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación, restituciones mutuas, genérica (expediente digital 08).

La accionada Colpensiones en la contestación de la demanda aceptó la fecha de nacimiento del actor; la afiliación a Colpensiones; el traslado del régimen pensional a PROTECCIÓN S.A pero no le consta las condiciones de tiempo, modo y lugar; el traslado; el tiempo cotizado al ISS; el derecho de petición elevado Colpensiones y la respuesta dada por la entidad. No le constan los hechos restantes.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de aspectos legales y financieros que impiden el retorno del demandante al régimen solidario de prima media con prestación definida; improcedencia de traslado de régimen pensional cuando quien demanda se encuentra pensionado; inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen pensional; responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social juicio de proporcionalidad y ponderación; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe; prescripción y/o caducidad de la acción; imposibilidad de condena en costas genérica (expediente digital 09).

Se dio por no contestada la demanda por parte de la **sociedad PROTECCIÓN S.A.** en auto emitido el 24 de mayo de 2023 (expediente digital 14).

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 5 de febrero de 2024, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ ineficaz la afiliación del demandante realizada PROTECCIÓN S.A el 3 de diciembre del 1998, en consecuencia, declaró que para todos los efectos legales el demandante nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual y por lo mismo siempre permaneció en Primera Media.

Le ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A y a PORVENIR S.A, trasladar a Colpensiones además de los saldos sobrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima indexados y con cargo a sus propios recursos desde la fecha de traslado al Régimen de Ahorro Individual, y al momento de cumplir la orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle por movilizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que lo justifiquen.

Le ORDENÓ a Colpensiones a recibir los citados conceptos que traslade y devuelva PROTECCIÓN S.A y a PORVENIR S.A, y concedió un término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, para el cumplimiento de esa orden, término que corre en forma paralela a cada uno de los fondos del Régimen de Ahorro Individual. Se abstuvo de resolver las excepciones propuestas por Colpensiones porque no participó en el acto jurídico y por ello no fue condenada en costas. Condenó en costas a PROTECCIÓN S.A y a PORVENIR S.A.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la sociedad PORVENIR S.A se aparta de la decisión de declarar en la eficacia del traslado ni los efectos jurídicos dados, por lo que solicita la revocatoria de la sentencia, aduciendo que no hay lugar a declarar la ineficacia aduciendo la falta de información al no haber sido una obligación que fuera brindada conforme lo determina la Circular No. 19 de 1998 de la Superintendencia Financiera donde solo se exigía que el afiliado expresara su voluntad para tenerse como materializado y válido el traslado de régimen

pensional, ello a través del formulario; que en este evento la accionada cumplió de las obligaciones a su cargo, y el actor ha decidido permanecer en el régimen en forma libre, voluntaria e informada y que se ha ratificado en el tiempo. Que no hay lugar a asegurar que la ineficacia se da por vicios del consentimiento, al haberse brindado asesoría oportuna conforme a la ley; con base en lo anterior, considera que en este evento se da el fenómeno del art 1752 y siguientes del Código Civil, relativos al saneamiento del consentimiento por ratificación tácita, al haberse realizado aportes en el en forma personal y voluntaria; que no se puede obligar a la demandada a aportar documentos que no eran al momento del traslado conforme lo indica la Ley 1328 del 2019 y la obligación de hacer una proyección y obligación de enviar extractos solo se consagra con la Ley 1748 de 2014 vigente a partir del 26 de diciembre de 2014; resalta que la ignorancia de la ley no sirve de excusa

En segundo lugar, se opone a la devolución de los gastos de administración, porque conforme el art. 20 de la Ley 100 de 1993, en el Régimen de Prima Media se destinó el 3% de la cotización de financiar los gastos de administración y pensión de invalidez y sobrevivientes; invoca la prescripción de los gastos de administración al no forman parte integral de la pensión de vejez; aunado a ello, en el concepto del 17 de enero del 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia, expone que en los eventos de existir ineficacias del traslado, las sumas a retornar son los aportes y rendimientos de la cuenta individual del afiliado, sin que proceda la devolución de prima de seguro provisional, al haberse cumplido el deber de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, ni haya lugar a la comisión de administración.

Que solo hay lugar a retornar aportes y rendimientos de la cuenta del afiliado, dineros que PORVENIR S.A le entregó a PROTECCIÓN S.A por la multiplicidad de la afiliación, resaltando que el actor se encuentra afiliado a PROTECCIÓN S.A. Solicita se declare la prescripción de la devolución de gasto de administración y las primas de seguros o cualquier suma diferente al capital de la cuenta individual del afiliado y los rendimientos financieros, al no financiar la pensión de vejez.

So opone a la condena en costas por desconocer el factor objetivo del art. 365 del CGP, porque al establecer que PORVENIR S.A generó el traslado de régimen, se toma las costas como una sanción o indemnización; sustenta su recurso con la sentencia C 157 de 2013 donde expresa que las costas es el resultado de la derrota en el proceso o del recursos propuesto; que la ser

Colpensiones una sociedad vencida, también debe ser condenada en costas y ser condenada, pero en caso de no evidenciarse las costas procesales, se debe absolver a PORVENIR S.A

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la parte demandante solicita que la sentencia sea conformada con fundamento en las sentencias 31.989 de 2008, SL 3202, SL 2611 de 2020, SL 3708, SL 4025, SL 5280, SL 5680 de 2021, SL 890, SL 891, SL 895 y SL 2060 de 2022, de las cuales resalta el deber de información de los fondos de pensiones de brindar información objetiva, completa, transparente, comprensible, oportuna; que el deber de información ha estado presente desde el Decreto 663 de 1993 y con la creación del Sistema General de Seguridad Social; la inversión de la carga probatoria a favor del demandante y conforme a la prueba aportada, se concluye que PROTECCIÓN S.A. no realizó ningún esfuerzo probatorio, no contestó la demanda, lo que se constituye en un indicio grave en su contra y donde el único soporte del traslado es el formulario de vinculación el cual no es suficiente para afirmar el consentimiento informado; de otro lado, del interrogatorio de parte absuelto por el actor no se puede sustraer el cumplimiento del deber de información.

Señala que la inobservancia del deber de información, establecida en los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 13 del CST y art. 53 de la Constitución Política, a la luz de la sentencia SL 4360 de 2019, genera el deber de retrotraer las coas al estado en que se encontraban. Que tampoco fue probada el deber de información al momento del traslado horizontal que realizó el demandante dentro del RAIS. Sustenta sus alegatos en las sentencias SL 4705 de 2021, SL 2173 de 2022.

Considera que se debe trasladar las cuitas de administración indexadas, a la luz de lo señalado en las sentencias SL 17595 de 2017, SL 2877, SL 4811 de 2020, y radicado 88556 del 18 de agosto de 2021. E invoca la sentencia SL 2060 de 2022 que hace referencia a la doctrina probable.

La sociedad Porvenir S.A. considera que en este evento no se alegó ni se probó las causales previstas en los arts. 1741, 1508, 1513, 1515, 1517, y 1524 del CC, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación sea eficaz. Que si se pretende declarar la ineficacia del art. 271 de la Ley 100 de 1993, esta norma establece la ineficacia cuando existen actos que impidan o atenten contra la afiliación del trabajador; es decir, exige conductas dolosas que

impidan o atenten la libre y voluntaria afiliación del posible afiliado, sin que se refiera a los dispuesto en los arts. 1740 y ss, y por el principio de inescindibilidad de las normas se impide acudir en forma indiscriminada a diferentes normas para resolver un asunto en concreto, y pese a esto, para definir las declaraciones de ineficacia y/o nulidad de los traslados, se acuda a normas del sistema general de pensiones, sin consideración a que esta norma propia indica que será ineficaz el traslado, cuando se ejecutan las conductas con la intención que allí se mencionan, pero se acude a las disposiciones civiles para establecer los efectos de la ineficacia y sin que se tenga en cuenta los presupuestos que esta norma establece para declarar la nulidad de un acto o contrato. El único artículo que refiere a la ineficacia de pleno derecho de un acto jurídico es el artículo 897. Que en el presente proceso, ninguno de estos presupuestos legales se alegaron, ni se demostraron; que el formulario de afiliación suscrito es un documento público que se presume auténtico según los arts. 243 y 244 del CGP y el párrafo del art. 54A del CPT, y contiene la declaración de que trata el art. 114 de la Ley 100 de 1993, donde la selección fue libre, espontánea y sin presiones; que ese documento no fue tachado ni desconocido, por lo que probatoriamente no es dable restarle valor y menos desconocerlo como se dispone en los arts 246 y 272 del CGP. Que en caso de presentarse, como no existe objeto o causa ilícita, tampoco el consentimiento de la parte actora estuvo viciada por error, fuerza o dolo, ni suscribió el formulario como incapaz absoluto, de presentarse alguna irregularidad distinta, la misma estaría saneada conforme lo indican los arts. 1742 y 1743 del CC por la ratificación tácita de la parte demandante. Y resalta que la parte demandante tiene el deber de estar informada y cerciorarse de los servicios que desea contratar.

Que PORVENIR S.A., le garantizó el derecho de retracto, conforme la publicación realizada en el diario el Tiempo el 14 de enero de 2004, como se dispuso en el art. 3º del Decreto 1161 de 1994 (esto fue adicionado), lo que debe valorarse como negligencia de su parte.

Que la parte demandante realizó cambio de régimen de forma libre y voluntaria, en el cual se le brindó una información necesaria y suficiente, pudo comparar con el conocimiento que tenía del RPM, decisión escoger el RAIS y se materializó en la suscripción del formulario de afiliación. Que no se ajusta a la realidad, la afirmación que la entidad no allegara pruebas del cumplimiento de sus deberes al momento de la vinculación, al haberse cumplido con la carga procesal al aportar los documentos que tenía su poder, para demostrar que la parte actora ha estado vinculada, producto de una decisión libre e informada,

lo que se acredita no solo con el formulario de afiliación, el cual se demuestra con un documento que se presume auténtico, y con la conducta del afiliado que permaneció en el RAIS y permitió el descuento con destino al fondo privado. Que la conducta de haber permitido el descuento del aporte con destino al fondo privado deben considerarse como “la verificación de la voluntad del afiliado” conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47.236 de 2016.

En relación a la carga de la prueba, consideró que no se puede imponer cargas a Porvenir, distintas a las previstas en las leyes existentes al momento en que sucedió la afiliación de la parte demandante e invocó la sentencia SL 1637 de 2022. Y frente al análisis de la carga de la prueba, sostiene que en primera instancia se declaró la nulidad y/o ineficacia del traslado, sin analizar en conjunto las pruebas y desconociendo el art. 1602 del CC.

Resalta la diferencia que existe entre la ineficacia de un acto jurídico con la nulidad absoluta y que en ese sentido no se pueden confundir. Que en el evento de considerarse que el negocio jurídico celebrado no tuvo validez, no puede olvidarse que el literal b) del art. 113 de la Ley 100 de 1993, menciona cuáles son los dineros que se deben trasladar cuando existe el cambio de régimen, siendo ello lo que impide que se pueda ordenar la devolución de sumas diferentes, y por su parte el art 1746, establece que la regla general de la nulidad. Que en caso de ordenarse el traslado de conceptos diferentes a los del art. 113 de la Ley 100 de 1993, se configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico como lo es Colpensiones.

Como recuento de la línea jurisprudencial de la ineficacia del traslado, trae a colación apartes de las sentencias SL 1637 de 2022 y SL 2877 de 2020.

Por su parte, en lo que respecta a la buena o mala fe de las partes en las restituciones mutuas, con sustento en el arts. 964 y 1746 del Código Civil. Que en atención al principio de la congruencia de la sentencia Art. 281 del CGP, al no haberse discutido ni probado la mala fe de PORVENIR S.A., no puede condenarse a “restituir a favor del afiliado y por ende de un tercero como es Colpensiones”, los rendimientos financieros generados por la gestión adelantada. No se debe trasladar las primas de seguros porque el afiliado estuvo protegido; y como argumento para no acceder a las pretensiones de la demanda indicó que era la sentencia C 1024 de 2004.

En caso de ser confirmada la sentencia, aduce que, en aplicación del principio de la congruencia, no se puede ordenar la devolución de los rendimientos financiero que los aportes de la parte demandante produjeron en el RAIS al no ser alegados ni probada la mala fe, y solo debería trasladar PORVENIR SA., los rendimientos equivalentes del RISS (tasa anual efectiva de la rentabilidad acumulada de las reservas pensionales de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia) administradas por el ISS.

Pero si la orden es reintegrar la totalidad de los rendimientos, solicita sea autorizada PORVENIR S.A a descontar de dicho concepto, las restituciones mutuas a que haya lugar, como quiera que la accionada realizó gestiones a favor del afiliado que le generó rendimientos; condenar al traslado de aportes con rendimientos, se debe aplicar la figura de las restituciones mutuas sin que se deba condenar a PORVENIR S.A. a devolver los gastos de administración y de seguros.

Con fundamento en las sentencias C 00161 de 2010, SL 9316 de 2016 y sentencias de los Tribunales Superiores de Cundinamarca y Cali, solicita no se condene a la indexación de las sumas. Además, que dicha orden impone una doble sanción.

El apoderado de Colpensiones en sus extensos alegatos, solicita la revocatoria de la sentencia, argumentando en síntesis, que no comparte que los hechos de la demanda se traten de negaciones indefinidas lo que hace que no se altere la carga de la prueba, por lo tanto, la parte demandante debía demostrar la falta de información; que al tratarse de negaciones definidas, no configuran negaciones indefinidas, hay imposibilidad de hacer un análisis de lo dispuesto en el artículo 1604 del CC porque en esa disposición no se consagra una presunción de culpa; cuando la Corte Suprema de Justicia establece como regla, cuál debe ser el contenido de la información, se arroga una función que no le corresponde y contrario a ello, no existe un estándar de prueba determinado por el legislados, y considera que la Corte petrifica una regla mediante la cual se concluye que el formulario de afiliación acredita un consentimiento, pero no informado y ello lo sustenta con la aclaración al voto de la sentencia SL 1452 de 2019.

Sobre periodos mínimos de carencia y sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, trae a colación el art. 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 2º de la Ley 797 de 2003, el cual dispone sobre la libertad de elección del régimen, la sanción del art. 271 de la Ley 100 de 1993

y la sentencia C 1024 de 2004, y con base en ello señala que en el presente caso se pretende el traslado habiendo cercanía a la edad mínima pensional, deduciéndose de acuerdo con las reglas de la sana crítica, específicamente las de la experiencia, que la finalidad de la parte actora es la búsqueda del reconocimiento de una prestación por vejez en el Régimen Solidario de Prima Media, sin que existan aportes al régimen pensional público que permitan la consolidación y proyección de un cálculo actuarial dentro, y sobre el acto jurídico de traslado de régimen, debe imperar el efecto relativo de los contratos (Art. 1602 C.C.); resalta que en este asunto se trata de personas plenamente capaces sin que se observe vicios del consentimiento, la parte demandante actuó conforme a la autonomía de la voluntad, firmó el formulario, el cual se encuentra ajustado al art. 11 del Decreto 692 de 1994, no era beneficiaria del régimen de transición, por lo que no tenía una expectativa legítima o derecho adquirido, por lo que ello impide su retorno al RPM; el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a 10 años o menos de la edad mínima pensional, sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición, que accedieron a este por medio del tiempo de servicio o cotizaciones (Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002, SU- 062 de 2010 y SU – 130 de 2013), por lo que la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional de un contingente de personas con características diferentes a las dispuestas por la Corte Constitucional, pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema, a la par que pondría en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

En sus alegatos, hace referencia al salvamento de voto de la sentencia SL 3537 de 2021. Finalmente, en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, solicitó se le ordene a las Administradoras del RAIS trasladar a Colpensiones la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el RAIS, precisando los conceptos a reintegrarse y un término perentorio.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en virtud del **recurso de apelación**: i) Si en el presente caso hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si la orden de trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual y rendimientos solo recaen en PROTECCIÓN S.A; iii) Si hay lugar a revocar la orden impuesta a PORVENIR S.A., de trasladar los gastos de administración

y los seguros previsionales; vi) Si hay lugar a condenar a Colpensiones en costas procesales o a absolver a PORVENIR S.A del pago de las mismas.

Y en el **grado jurisdiccional de consulta** se deberá analizar: i) Si hay lugar a adicionar la sentencia, condenando a PORVENIR S.A. a trasladar la prima de reaseguros de Fogafín debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante no es beneficiario del régimen de transición, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 40 años de edad al haber nacido el 21 de diciembre de 1960 (fl. 21 y 22 del expediente digital 03); cotizó al ISS del 10 de enero de 1980 al 31 de enero de 1999 (fl. 24); y laboró para la Dirección Seccional de Salud de Antioquia del 13 de abril de 1989 al 24 de abril de 1990 y del 3 de julio de 1990 al 31 de mayo de 1996 sin existir cotizaciones de ese periodo al ISS, según consta en el CETIL de fls 30 a 34; se trasladó a PROTECCIÓN S.A el 3 de diciembre de 1998 (fl. 36), posteriormente solicitó traslado a PORVENIR S.A el 31 de julio de 2001 y retornó a PROTECCIÓN S.A 21 de marzo de 2003 (fl. 37 y 38 del expediente digital 03 y fl. 74 del del expediente digital 08).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por el accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que es Médico General; frente al traslado realizado a la sociedad PORVENIR S.A indicó que nunca recibió asesoría de ese fondo; se trasladó a PORVENIR S.A porque estaba trabajando a Saludcoop y le dijo que le ayudara porque tenía una amigo en PORVENIR S.A y era lo mismo que estar en PROTECCIÓN S.A; firmó formulario con PORVENIR S.A el cual firmó en forma libre y voluntaria; actualmente está afiliado en PROTECCIÓN S.A; que estuvo afiliado en PROTECCIÓN S.A desde 1998 luego paso a PORVENIR S.A aproximadamente 2 años y retornó a PROTECCIÓN S.A; se trasladó nuevamente a PROTECCIÓN S.A porque en el año 2005 sacó el auxilio de cesantías para el estudio de su hijo y el asesor le dijo que regresara, le dijo que era mismo que estar en PORVENIR S.A, que PROTECCIÓN S.A era una empresa Antioqueña y PORVENIR S.A era Bogotana que unificara las cosas; firmó el formulario con PROTECCIÓN S.A, lo leyó y entendió el contenido; los motivos de la demanda es porque se siente tumbado o mal informado, porque cuando se traslado el asesor les dio una charla grupal en el hospital de Yarumal y le indicó que se podían pensionar antes de tiempo, que la mesada pensional iba a ser mejor que con el ISS, las AFP estaban ofreciendo mucho,

que el ISS se iba a quebrar porque el Estado no tenía la capacidad para sostenerlo y por eso se cambió.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los**

intereses de los afiliados- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**". (Resalto fuera del texto)

"OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado." (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

"...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; ..."

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice que la información tiene que ver con: 1º. **La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional**, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217, 782 de 2021 y SL 1465 de 2021, SL 755, SL 779 y SL 4297 de 2022 y SL 1084 de 2023, y como juez constitucional en las sentencia STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin

que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, **cuando tomó la decisión de trasladarse a dicho fondo de pensiones**, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se violenta el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvo efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles (sentencia SL 3202 de 2021 que remite a las sentencias SL 1688 de 2019, SL 12715 de 2014, 28.479 de 2008, 39.347 de 2012 y 8397 de 1996) **y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto**, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. PROTECCIÓN S.A no aportó pruebas teniendo en cuenta que se dio por no contestada la demanda y ante la inasistencia del representante legal de dicha AFP a la audiencia de conciliación, el Juzgado aplicó la **sanción del art. 77 del CST** dando por confesado el no haber asesorado o no dar la correcta asesoría al demandante, lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al Régimen de Ahorro Individual, **no les dieron una información completa y suficiente**.

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de ineficaz la afiliación realizada a PROTECCIÓN S.A y la orden dada a PROTECCIÓN S.A de

trasladar a Colpensiones los saldos sobrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima indexados y con cargo a sus propios recursos.

2. De los efectos de la ineficacia

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes¹:

1º. Capital ahorrado: Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

2º. Rendimientos: En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

3º. Los gastos de administración, encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: *“... el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”*, traslado que tiene sustento en lo siguiente:

En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la

¹ Sentencia SL 3051 del 7 de julio de 2021, engloba la obligación de trasladar todos los conceptos, al señalar: “Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”

ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al Régimen de Ahorro Individual, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden de que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

***En tal sentido, se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.”** (Resalto fuera del texto)*

Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Así mismo debe precisarse que los anteriores conceptos deben ser trasladados **con cargo a los propios recursos** de la AFP del RAIS sin necesidad de vincular a las aseguradoras, según lo ha consagrado en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019 y CSJ SL2877-2020, precisándose en dichas providencias que estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

Conceptos que **no prescriben** teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021, SL 1688 de 2019, SL 1465 de 2021, SL1949-2021, y SL 4063 de 2021).

4º. Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima: el traslado de estos aportes se encuentra igualmente consagrado en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 porque al tratarse de un aporte propio del Régimen de Ahorro Individual, no encuentra un equivalente en el Régimen de Prima Media, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo **7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016**; traslado que tiene como sustento jurisprudencial la sentencia SL 2877 de 2020.

Para concluir, en sentencia reciente SL 3051 del 7 de julio de 2021, se engloba la obligación que tienen las entidades del Régimen de Ahorro Individual de

trasladar los conceptos referidos anteriormente, al señalar: *“Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”*

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el **principio de sostenibilidad financiera** no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

“Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas.”

Teniendo claro lo anterior, considera la Sala que se deberá:

- REVOCAR la orden dada a PORVENIR S.A, de trasladar a Colpensiones los saldos sobrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante, bajo el entendido que los aportes que reposaban en la cuenta de ahorro individual del actor en la AFP PORVENIR S.A, fue trasladado a PROTECCIÓN S.A conforme reposa en el certificado emitido por PORVENIR S.A y que reposa a fl. 77 del expediente digital 08.
- ADICIONAR la sentencia, ORDENÁNDOLE a PROTECCIÓN S.A trasladar a Colpensiones los rendimientos causados.
- ADICIONAR la sentencia, ORDENÁNDOLE a las sociedades PROTECCIÓN S.A y a PORVENIR S.A, trasladar a Colpensiones la

prima de reaseguros de Fogafín debidamente indexado y con cargo a su propio patrimonio.

Advirtiéndose que, los descuentos por conceptos de Fogafín se deberán retornar, por el tiempo en que se hayan efectivamente realizado.

3. De las costas impuestas a PORVENIR S.A en primera instancia

Se REVOCA las costas impuestas a PORVENIR S.A, teniendo en cuenta que solo fue PROTECCIÓN S.A la entidad encargada de realizar la asesoría a efectos de que el actor realizara el traslado de régimen pensional, sin que PORVENIR S.A haya tenido injerencia en dicha decisión, tal y como ocurrió con Colpensiones.

En consecuencia, se ABSOLVERÁ a PORVENIR S.A del pago de costas procesales en primera instancia.

Frente a los demás aspectos alegados por la AFP Porvenir S.A, no se hará un pronunciamiento, teniendo en cuenta que el principio consonancia establecido en el art. 66A del CPT y SS establece “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, **deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación**” (resalto fuera del texto).

Costas en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a cargo de la sociedad PORVENIR S.A. y a favor del demandante, por prosperar parcialmente el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la orden dada a PORVENIR S.A, de trasladar a Colpensiones los saldos sobrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia, **ORDENÁNDOLE** a PROTECCIÓN S.A trasladar a Colpensiones los rendimientos causados.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia, **ORDENÁNDOLE** a las sociedades PROTECCIÓN S.A y a PORVENIR S.A, trasladar a Colpensiones la prima de reaseguros de Fogafín debidamente indexado y con cargo a su propio patrimonio.

Advirtiéndose que, los descuentos por conceptos de Fogafín se deberán retornar, por el tiempo en que se hayan efectivamente realizado.

CUARTO: REVOCAR las costas procesales impuestas PORVENIR S.A en primera instancia, y en su lugar **ABSOLVER** de su pago.

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, por lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: Costas en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a cargo de la sociedad PORVENIR S.A. y a favor del demandante, por prosperar parcialmente el recurso de apelación.

SÉPTIMO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Con aclaración de voto

ACLARACIÓN DE VOTO

Con todo respeto, me permito aclarar mi voto frente a la sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor MARTÍN RAÚL ROLDÁN RODRÍGUEZ contra el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., PROVENIR S.A. Y COLPENSIONES, radicado bajo el 05-001-31-05-016-2023-00010-01, solo en cuanto a la decisión de revocar la condena en costas de primera instancia que se le impuso a la AFP PORVENIR S.A, pues, si bien con anterioridad la suscrita consideraba que se debía imponer costa en primera instancia a todas las AFP demandas al estimar que fueron vencidas en juicio, un nuevo análisis del tema me lleva a coincidir con el criterio de la Sala en el sentido que es a la primera AFP encargada de realizar la asesoría a efectos de que el afiliado (a) realizara el traslado de régimen pensional, y que tiene injerencia en tal decisión, no así las posteriores, a quien debe imponérsele tales costas, de salir avante la pretensión de ineficacia de traslado de régimen pensional.

La Magistrada:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

Fecha ut-supra.



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MARTÍN RAÚL ROLDÁN RODRÍGUEZ
DEMANDADO :	: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., PROVENIR S.A. Y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-016-2023-00010-01
RADICADO INTERNO	: 025-24
DECISIÓN	: REVOCA PARCIALMENTE, ADICIONA, ORDENA, ABSUELVE Y CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/162> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 14 de marzo de 2024 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 14 de marzo de 2024 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario